



Sr. Amilivia González, Presidente

Sr. Estella Hoyos, Consejero

Sr. Fernández Costales, Consejero y
Ponente

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Madrid López, Consejero

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunido en Zamora el día 24 de junio de 2010, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de sssss S.A.*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 25 de mayo de 2010 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. yyyyy, en nombre y representación de sssss S.A., debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 28 de mayo de 2010, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 584/2010, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Fernández Costales.

Primero.- El 10 de febrero de 2010 tiene entrada en el registro de la Diputación Provincial de xxxx2 una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. yyyyy, en nombre y representación de sssss S.A., debido a los daños sufridos en el vehículo de su asegurado D. xxxxx, matrícula xxxx, por la irrupción de un ciervo en la calzada.



Expone en su reclamación que el día 19 de marzo de 2009, sobre las 21:10 horas, el vehículo circulaba por la carretera xx1, término municipal de xxxx1 en dirección a esa localidad y al llegar a la altura del punto kilométrico 18,450, fue sorprendido por la súbita irrupción de un ciervo en la calzada procedente del margen derecho según el sentido de la circulación, que colisionó con el vehículo, sin que el conductor pudiera hacer nada para evitarlo.

El vehículo sufrió daños cuya reparación asciende a 2.669,16 euros.

Adjunta a su reclamación copia del poder general para pleitos, del atestado instruido por el Subsector de la Guardia Civil de xxxx2, del informe estadístico Arena y de la factura de reparación del vehículo satisfecha por la compañía aseguradora ssss S.A. por importe de 2.669,16 euros, cuantía que se corresponde con la indemnización solicitada.

Segundo.- Mediante decreto de la Diputación Provincial de xxxx2 de 12 de febrero de 2010 se nombra instructora del procedimiento, lo que se notifica a la parte reclamante.

Tercero.- El 5 de marzo de 2010 el Ingeniero Jefe del Servicio de Vías Provinciales emite informe en los siguientes términos:

“Como se observa en el reportaje fotográfico adjunto, el p.k.: 18+450, de la CP xx1 de xx2 en xxxx2 a xx3 en xxxx3 por xxxx4 y xxxx1, donde tuvo lugar el accidente, según parte de la Guardia Civil, cuando el vehículo iba dirección a xxxx2 se corresponde con tramo sinuoso de carretera de visibilidad considerable, con arcén y cunetas limpias de vegetación.

»La carretera es de doble sentido, con carriles libres de 3,00 metros (...) con anchura de la calzada de 7,00 m, donde hay línea central de separación de carriles, debidamente señalizada vertical y horizontal, existiendo en la señalización vertical señales tipo P-24 de peligro por paso de animales en libertad, que están colocadas cada tres kilómetros.

»En sentido de circulación a xxxx2 desde la xx3 en xxxx3, con anterioridad al punto del accidente existe señal P-24 ‘paso de animales en



libertad'; en los pp.kk: 24+100 y 21+200. En el p.k.: 24+520, hay colocado además cartel reflectante de grandes dimensiones recordando al conductor que reduzca la velocidad por irrupción de animales incontrolados en la calzada.

»El terreno colindante con la carretera en la zona del accidente forma parte del coto privado de xxxx5, no existiendo tablilla junto a la carretera con número de coto”.

Se adjunta al citado informe reportaje fotográfico del estado de la vía donde tuvo lugar el accidente y datos y gráficas elaborados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Subsector de xxxx2, sobre accidentes con animales en la provincia de xxxx2 en el año 2009.

Cuarto.- Concedido trámite de audiencia, la parte interesada no presenta escrito de alegaciones.

Quinto.- El 13 de abril de 2010 se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación planteada, al no haber quedado acreditada la necesaria relación de causalidad entre el daño sufrido por el reclamante y el funcionamiento del servicio público local.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla A), apartado h), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen



Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3ª.- Concorre en la parte interesada los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las entidades aseguradoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 50/1980 de 20 de octubre, una vez pagada la indemnización podrán subrogarse en la posición de su asegurado y ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro le correspondan frente a las personas responsables del mismo hasta el límite de la indemnización.

La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Presidente de la Diputación Provincial de xxx2, o a la Junta de Gobierno en el supuesto de la existencia de la delegación de competencias efectuada por el Presidente a favor de aquella, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

La parte reclamante ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esto es, antes de transcurrir el plazo de un año desde la fecha del hecho causante. Los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2009 y la reclamación se presentó el 10 de febrero de 2010.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse efectuada a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que además se remite, de forma genérica, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.



Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la reiterada doctrina del Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

En la esfera de las Administraciones Locales, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que "Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa". Este precepto es reproducido, prácticamente de forma literal, por el artículo 223 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre.



El artículo 3.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, establece que "Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local".

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios formulada por D. yyyyy, en nombre y representación de sssss S.A., debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un ciervo en la calzada.

Conforme a la doctrina del Consejo de Estado, la presencia incontrolada de animales en la calzada de las carreteras constituye un factor ajeno a las exigencias de seguridad viarias y no puede reputarse como una anomalía en la prestación del servicio público, sino como un supuesto que enerva la relación de causalidad exigible para generar la responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que su acceso a la carretera puede resultar inevitable, si se atiende a las diferentes formas en que pueden acceder a la calzada (Dictámenes 1.453/1993, 1.867/1994, 1.360/1995, 1.809/1995, 1.869/1995, 2.672/1995, 2.587/1996, 2.907/1996, 3.261/2000 y 3.123/2000, de 23 de noviembre, entre otros). Este criterio es el adoptado y mantenido por este Consejo Consultivo (por todos, Dictámenes 650/2009, 678/2009, 679/2009, 683/2009 y 686/2009).

La especie causante del accidente es un ciervo, como así consta en las diligencias instruidas por el Subsector de la Guardia Civil de xxxx2. El ciervo es una especie cinegética, tal y como se deduce del anexo del Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León y, por ello, está incluida en las órdenes anuales de caza de la Consejería de Medio Ambiente.

El artículo 12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, en la redacción vigente en el momento de producirse los hechos, señala que "La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación".



La legislación estatal de aplicación es la disposición adicional novena del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Dicha disposición adicional establece lo siguiente:

“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.

»Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

»También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización”.

La conjunción de las referidas normas determina, en síntesis, que de los daños ocasionados en accidentes de tráfico provocados por atropello de especies cinegéticas serán responsables hasta tres posibles sujetos: 1º, el conductor del vehículo, si el accidente es consecuencia del incumplimiento de las normas de circulación; 2º, los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado; y 3º, el titular de la vía pública en la que se produce el accidente, cuando éste sea consecuencia del estado de conservación de la vía o de su señalización.

A la vista de los datos resultantes del expediente, se considera que la actuación del reclamante se adecuó a las normas que regulan la utilización de los vehículos a motor en las vías públicas; y que la Administración, por su parte, cumplió con las normas que, en relación con la conservación y señalización de la vía, le resultan exigibles.



En cuanto a la responsabilidad del titular de la vía pública, el artículo 57.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, dispone que “Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, los Agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa”.

Del expediente se desprende que la carretera estaba en correctas condiciones de seguridad. El informe del Ingeniero Jefe del Servicio de Vías Provinciales indica que el tramo donde ocurrió el accidente es sinuoso con considerable visibilidad y la vía se encuentra debidamente señalizada vertical y horizontalmente, existiendo en la señalización vertical señales tipo P-24 de peligro por paso de animales en libertad, que están colocadas cada tres kilómetros.

En sentido de circulación a xxxx2 desde la xx3 en xxxx3, con anterioridad al punto del accidente existe señal P-24 “paso de animales en libertad” en los puntos kilométricos 24+100 y 21+200. En el punto kilométrico 24+520 está colocado, además, un cartel reflectante de grandes dimensiones que recuerda al conductor que reduzca al velocidad por irrupción de animales incontrolados en la calzada.

Así, pues, tal y como se observa claramente en el reportaje fotográfico que se adjunta al citado informe, las señales de peligro eran perfectamente visibles por el conductor antes de acceder al punto kilométrico donde tuvo lugar el accidente.

Además, el buen estado de conservación de la vía se constata en las citadas diligencias de la Guardia Civil, que indican que existía señalización de peligro (apartado 46), y la superficie era seca y limpia (apartado 41).

Hay que precisar que la carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante, de acuerdo con los viejos aforismos *necessitas probandi incumbit ei qui agit* y *onus probandi incumbit actori*, recogidos en el artículo 217 de la Ley



1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al señalar que incumbe al actor “la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda (...)”, por remisión del artículo 60.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con lo que, más específicamente para el régimen de la responsabilidad objetiva de la Administración, dispone el artículo 6.1 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Es decir, al reclamante incumbe acreditar el hecho derivado del funcionamiento del servicio público y la existencia del exigible nexo causal entre tal hecho y la lesión denunciada; la Administración, por su parte, deberá probar los hechos que, en su caso, desvirtúen los alegados.

En este ámbito es necesario advertir que quien debe valorar la correcta diligencia o no en la conservación de una vía es la Administración competente, a través de sus técnicos, que deben tener en cuenta si se aplica correctamente la normativa en la materia y si han existido incidentes en el pasado.

La parte reclamante, por otro lado, debería haber dirigido su actividad a demostrar que la carretera no cumplía con el estándar de seguridad mínimo por su falta de señalización, ya sea por la repentina proliferación de accidentes por animales -que parece ser que en este caso no existieron con anterioridad- o porque sea un paso habitual, continuo o discontinuo de éstos.

El artículo 19.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, señala que “Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurren en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse”. Este precepto es reproducido de forma literal por el artículo 45 del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1.428/2003, de 21 de noviembre.

Tal y como ha puesto de manifiesto este Órgano Consultivo (por todos Dictamen 101/2004, de 10 de marzo), cuando los perjudicados por accidentes



acaecidos con motivo de la irrupción de animales en la carretera deducen pretensiones de resarcimiento frente a la Administración titular de la vía pública en que acontece el accidente, este Consejo -conforme a los razonamientos que anteceden- no aprecia la indispensable relación de causalidad para generar la responsabilidad administrativa. Sin embargo, en tales casos, el propio Consejo de Estado entiende que ello no obsta para que aquéllos puedan promover, conforme previene el artículo 1.905 del Código Civil, las acciones de resarcimiento a que hubiere lugar contra los poseedores de los animales supuestamente causantes de los daños.

En el presente caso, los terrenos a ambos márgenes de la vía corresponden a un coto privado de caza, por lo que el reclamante puede dirigir sus acciones contra éste por la vía que corresponda si el daño se ha debido a una acción de cazar o a una negligente conservación del terreno acotado.

Por todo lo expuesto debe desestimarse la reclamación planteada al haber cumplido el titular de la vía, Diputación Provincial de xxxx2, con las obligaciones de conservación y mantenimiento y adecuada señalización, por lo que se rompe la relación de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio público.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. yyyyy, en nombre y representación de sssss S.A., debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.